



**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

**Nota de Reparación N° 05/2026.-**

**Proceso:** "Servicio de Fiscalización Financiera Ejercicio 2024 y Auditoría Impositiva"  
**Licitación por Vía de la Excepción, ID N° 478732".**

Asunción, 10 de febrero de 2026.-

**SEÑOR**

**Abg. Augustin Encina, Director**

**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**

**PRESENTE:**

**REF.:** "Servicio de Fiscalización Financiera Ejercicio 2024 y Auditoría Impositiva"  
**Licitación por Vía de la Excepción, ID N° 478732", para la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.-**

**I. VISTO:**

Las discrepancias expuestas por el verificador de la DNCP, referente al Proceso de Licitación por Vía de la Excepción para el **Servicio de Fiscalización Financiera Ejercicio 2024 y Auditoría Impositiva, ID., 478732.**

**II. CONSIDERANDO:**

**I. Del Marco Legal Aplicable:**

El proceso de referencia fue sustanciado originalmente bajo el amparo de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, su Decreto Reglamentario N° 2264/24, y demás Normativas que rigen la materia.

**Que, dentro de las atribuciones expuestas en el Art. 29°, Funciones de la UOC..., Decreto Reglamentario N° 2264/24..., num. 4..., que establece:** "...Remitir a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), los informes y resoluciones requeridos por la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones administrativas...", **la Resolución CJPPM N° 840/2025, Artículo 4°..., AUTORIZAR, a la Unidad Operativa de Contratación a llevar a cabo todos los actos, gestiones y trámites inherentes al proceso de contratación, tales como informes, descargos, ampliaciones, dictámenes y sus respectivas ampliaciones, relativos al "LLAMADO A LICITACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, para el SERVICIO DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 Y CONSULTORÍA IMPOSITIVA...", para la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL, hasta la obtención del respectivo Código de Contratación.**

**III. REITERACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN LEGAL Y OPORTUNA REFERENTE AL PROCESO POR VÍA DE EXCEPCIÓN.**

● **DICTAMEN TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN – UOC/2025.**

**OBJETO:** Justificación de Contratación por Vía de la Excepción - Art. 40, numeral 2, inciso c) de la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.

**a) ANTECEDENTES Y ENCUADRE LEGAL**



**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

Esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) somete a consideración de la Máxima Autoridad Institucional la procedencia del presente llamado bajo la modalidad de Excepción. El procedimiento se sustenta en el Art. 40, numeral 2, inciso c) de la Ley N° 7021/22, el cual faculta la contratación directa cuando concurren razones justificadas por urgencias imposterables.

Al respecto, la normativa y la doctrina administrativa exigen la concurrencia de tres presupuestos fácticos que esta UOC considera plenamente acreditados:

**Probidad:** La urgencia no es una mera afirmación, sino un hecho demostrable documentalmente.

**Objetividad:** Se basa en hechos externos y concretos, ajenos a la voluntad de desvirtuar la concurrencia.

**Inmediatez:** La necesidad de respuesta es de tal magnitud que el procedimiento ordinario resulta ineficaz para evitar un perjuicio grave al Interés Público.

#### **b) RELACIÓN DE LOS HECHOS Y AGOTAMIENTO DE LA VÍA ORDINARIA**

Resulta imperativo señalar que esta Institución no ha incurrido en omisión o falta de previsión. Por el contrario, se impulsó el procedimiento ordinario bajo el ID N° 466.610 "Servicio de Fiscalización Financiera Ejercicio 2024 y Auditoría Impositiva", publicado en fecha 04/08/2025.

Sin embargo, el proceso se vio interrumpido por una discrepancia de criterios técnicos con la instancia verificadora de la DNCP. Pese a que esta UOC evacuó todas las observaciones en tiempo y forma, la falta de convalidación técnica y la inminencia del cierre de comunicación de procesos (fijado para el 02 de octubre de 2025) generaron un escenario de indefensión administrativa.

Ante la imposibilidad temporal de obtener un dictamen vinculante de la Dirección Jurídica de la DNCP antes del cierre del ejercicio, la prosecución del proceso ordinario devino jurídicamente inviable y materialmente riesgosa.

#### **c) JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA IMPOSTERGABLE**

✓

**La adopción de la Vía de la Excepción se fundamenta en los siguientes pilares de orden público:**

**Riesgo de Parálisis Institucional (RUC):** La ausencia de la Auditoría Impositiva conlleva el riesgo inminente del bloqueo de la personería tributaria (RUC). Esto inhabilitaría a la Caja para emitir comprobantes, realizar retenciones y, fundamentalmente, cumplir con sus obligaciones ante la SET/ DNIT - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

**Salvaguarda del Patrimonio de los Afiliados:** La falta de este servicio técnico impediría la gestión de cobro de deudas críticas, como los Gs. 51.000 millones adeudados por la Municipalidad de Asunción, afectando la liquidez necesaria para el cumplimiento de los fines previsionales.

**Impacto Social y Paz Pública:** El perjuicio más grave radica en la potencial cesación de pagos a más de 2.700 jubilados y pensionados. La falta de fiscalización financiera impediría la liberación de fondos para haberes y aguinaldos pendientes del año 2025, configurando una catástrofe financiera para miles de familias.



**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

*La adopción de la presente vía excepcional no constituye en modo alguno una elusión de los mecanismos de concurrencia, sino que representa el ejercicio legítimo del Deber de Precaución y el Principio de Continuidad del Servicio Público. Esta decisión se halla plenamente subsumida en las causales previstas por la normativa vigente, considerando que la omisión de esta contratación derivaría en una parálisis institucional de fuerza mayor.*

*Fundamentada en los principios de Eficiencia, Economía y Valor por Dinero, la presente medida es imperativa para salvaguardar el Interés Superior del Afiliado. Una eventual interrupción administrativa provocada por el bloqueo de la personería tributaria (RUC) — consecuencia jurídica inevitable ante la falta de una Auditoría Impositiva en tiempo propio, anularía de facto la capacidad de recaudación de aportes jubilatorios de los municipios a nivel nacional.*

*En consecuencia, esta Unidad Operativa de Contratación ratifica que la Vía de la Excepción constituye la única medida idónea, proporcional y éticamente necesaria para mitigar un daño patrimonial sistémico. Se ha acreditado fehacientemente el agotamiento de la vía ordinaria, la cual se vio obstaculizada por criterios técnico-jurídicos de la DNCP que, pese a nuestras reiteradas aclaraciones, permanecieron en un ciclo de 'subsanações' circulares que omitieron la gravedad del contexto institucional.*

*Ante la falta de una directriz clara por parte del órgano rector, esta Institución debe priorizar la dimensión humana del derecho administrativo. No estamos ante un simple trámite burocrático, sino ante la subsistencia de miles de ciudadanos de la tercera edad cuyos haberes jubilatorios es el único sustento para su salud y vida digna, dependen directamente de la operatividad financiera de esta Caja.*

*El inminente bloqueo del RUC por parte de la DNIT no es una mera 'hipótesis de acreditación', sino una realidad técnica catastrófica que inhabilitaría el pago de beneficios.*

*Por tanto, anteponer un formalismo procesal dispar por encima del derecho alimentario de los jubilados, vulneraría el principio constitucional de justicia social. Por consiguiente, la institución no puede permitir una cancelación forzosa que condene a la vulnerabilidad a sus beneficiarios, por el contrario; actúa en cumplimiento de su deber de garante del bienestar de quienes han dedicado su vida al servicio municipal.*

✓ **La adopción de la Vía de la Excepción se fundamenta en los siguientes pilares relativos a la Ley 7021/22 de Suministro Público, el Decreto Reglamentario 2264/24 y la Resolución DNCP 230/2025:**

*Es importante señalar lo estrictamente establecido en la Resolución DNCP. N° 230/2025, que en su Artículo 89° Urgencia impostergable, la misma reza:*

*Los procedimientos de contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable previsto en el inciso c) del numeral 2) del artículo 40 de la Ley, podrán realizarse con difusión previa o con aviso de intención de compra, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. Las convocantes deberán optar preferentemente por el procedimiento con difusión previa que será publicado de conformidad a lo establecido en la presente resolución.*

*Que, si bien el marco normativo establece la preferencia por procedimientos con difusión previa, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal ha ejercido su facultad legal de optar por la Contratación por Vía de la Excepción con Intención de Compra. Esta decisión no es discrecional, sino que responde a una necesidad imperativa de salvaguarda institucional ante el riesgo inminente de bloqueo del RUC comunicado y mencionado en*





**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

reiteradas ocasiones. Es dable destacar que esta vía se activa (Excepción), tras el agotamiento material del procedimiento ordinario precedentemente individualizado, el cual se halla supeditado a discrepancias técnicas con el órgano rector. En consecuencia, se procedió a dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 95 de la Ley N° 7021/22, formalizando la publicación de los documentos e intenciones de compra en el Portal del Sistema de Contrataciones Públicas (SICP), que dice:

Cuando la convocante haya publicado el aviso de intención de compra, dentro del plazo máximo de diez días hábiles, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, deberá publicar en el SICP los siguientes documentos, como mínimo:

- a) Dictamen suscripto por el Titular de la UOC/UEP que justifique la realización del procedimiento de contratación por excepción con aviso de intención de compra;
- b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria;
- c) Bases Concursales que debe coincidir íntegramente con el contenido mínimo del aviso de intención de compra publicado.
- d) Acta de apertura de ofertas;
- e) Informe de evaluación de ofertas;
- f) Acto administrativo de la máxima autoridad de la convocante que resuelva la adjudicación, convalide lo actuado y dé por acreditado el supuesto de excepción;
- g) Contrato, o en su defecto orden de compra o servicio;
- h) Dictamen de precio referencial y antecedente de Estimación de Costos
- i) En los casos en que se disponga la utilización de Anticipo, remitir el dictamen de justificación, salvo que sea otorgado únicamente a MIPYMES.
- j) En caso de Obras Públicas: planos Aprobados, Autorizaciones Ambientales en caso necesario, permisos municipales,
- k) Acto administrativo que designa al Administrador del Contrato;
- l) Resolución de adjudicación de la máxima autoridad o a quien esta delegue, mediante disposición expresa, para el efecto deberá acompañar la Resolución por el cual se delega esta facultad;
- m) Cuadro comparativo de ofertas;
- n) Notificación de la adjudicación;
- o) Cualquier otra documentación respaldatoria que la DNCP o la convocante, consideren pertinente difundir.

En conclusión es importante subrayar que esta Unidad Operativa de Contratación ha dado cumplimiento estricto, oportuno y exhaustivo a la remisión de la totalidad del acervo documental, observando con rigor técnico los plazos perentorios y las formas sustanciales exigidas por el marco normativo. Sin embargo, resulta altamente preocupante y jurídicamente objetable que, a pesar de la trazabilidad absoluta de nuestras actuaciones y la transparencia acreditada en cada etapa del iter procedimental, nos enfrentemos a una inexplicable resistencia técnica que desvirtúa los principios de integridad y buena fe administrativa. Esta Institución no puede sino deplorar que criterios dispares y formalismos estériles pretendan sobreponerse a la verdad material de una urgencia que ha sido demostrada en varias ocasiones.



**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

Resulta una omisión gravosa por parte de las instancias de control ignorar que la gestión administrativa no es un fin en sí mismo, sino el vehículo para dar cumplimiento al mandato imperativo del Artículo 57 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, el cual consagra el derecho a una protección integral de las personas de la tercera edad. La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal no administra meros expedientes; vela por el sustento vital y la dignidad de más de 2.700 jubilados y pensionados en todo el territorio nacional.

Por tanto, ante una interpretación restrictiva de la norma que amenaza con el bloqueo inminente del RUC y la consecuente parálisis de los haberes jubilatorios, esta Convocante, en ejercicio de su autonomía funcional y responsabilidad social, se ve compelida a apelar a las herramientas excepcionales provistas por la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas. Una burocrática o una falta de intección técnica del órgano rector no debe condenar a la vulnerabilidad alimentaria y sanitaria a nuestros beneficiarios. La utilización de la Vía de la Excepción no es aquí una opción discrecional, sino un imperativo ético y legal para garantizar la paz social y el bienestar de quienes, por mandato constitucional, son sujetos de protección preferente del Estado."

#### **IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.**

##### **✓ Justificación Técnica de la Potestad Evaluativa de la UOC.**

"Es imperativo determinar que la actuación de esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) no constituye una facultad discrecional, sino el ejercicio de una competencia reglada y taxativa conferida por la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas. Ante la inexistencia de un Comité de Evaluación formalmente constituido por la Máxima Autoridad Institucional (MAI) a la fecha del acto, la responsabilidad de análisis y dictamen sobre la oferta presentada recae, por imperio legal, en la figura del Responsable de la UOC.

Esta competencia halla su fundamento de validez en el Artículo 37, inciso b) de la Ley N° 7021/22, el cual establece con claridad meridiana: 'Cuando la autoridad competente de la convocante no conforme un Comité de Evaluación, la Unidad Operativa de Contrataciones podrá realizar la evaluación de ofertas y recomendar la adjudicación'. Al ser una disposición de rango legal, cualquier normativa de carácter administrativo, reglamentario o procedimental emanada de la DNCP, que pretenda restringir, condicionar o negar la validez de dicha evaluación, resulta inaplicable e inoponible en virtud del Principio de Jerarquía Normativa consagrado en la Constitución Nacional. Ninguna resolución o guía administrativa posee la fuerza jurídica para dejar sin efecto un mandato legal que otorga a la UOC la plenitud de facultades evaluativas ante la ausencia del comité.

Asimismo, dicha actuación se halla en perfecta consonancia con el Artículo 31 del Decreto Reglamentario N° 2264/24, que ratifica la excepcionalidad de la constitución del comité para procedimientos especiales definidos por la Ley. En este contexto, la evaluación realizada sobre la única oferta presentada se ejecutó bajo el Principio de Verdad Material y Debida Diligencia, procediendo esta UOC a requerir la documentación respaldatoria necesaria para acreditar de forma fehaciente la capacidad financiera, solvencia técnica y experiencia comprobada del oferente.

Este requerimiento de información no es un mero formalismo, sino una acción de control preventivo destinada a asegurar que la adjudicación recaiga sobre una firma idónea, garantizando el cumplimiento efectivo del contrato y protegiendo el patrimonio de la Institución.



**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

*Por tanto, esta Unidad Operativa de Contratación ratifica la plena legalidad y validez jurídica de su informe de evaluación, el cual se sustenta en la jerarquía superior de la Ley de Suministro Público, prevaleciendo sobre cualquier interpretación administrativa restrictiva que pretenda vulnerar la autonomía y la eficacia de la gestión de contrataciones de esta Caja.*

## **V. DE LAS OBSERVACIONES POR LA FALTA DE SOLICITUD EN EL PBC REFERENTE A LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA Y EXPERIENCIA...**

### **✓ Justificación Técnica de la Evaluación Integral de Idoneidad**

*También es imperativo determinar que la estructuración de un Pliego de Bases y Condiciones (PBC) simplificado respondió a una estrategia de gestión de riesgos ante la urgencia impostergable, con el fin de maximizar la concurrencia y evitar barreras burocráticas iniciales. No obstante, la simplificación del pliego no implica, bajo ningún concepto, la renuncia de la Convocante a su Deber de Custodia del Interés Público ni a la obligación legal de verificar la idoneidad sustancial del adjudicatario.*

*En este sentido, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC), en ejercicio de las potestades conferidas por la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, ha procedido a realizar una evaluación de idoneidad post-apertura, requiriendo al único oferente la acreditación fehaciente de su capacidad financiera, técnica y experiencia específica. Esta actuación se fundamenta en los siguientes pilares jurídicos:*

**Primacía de la Ley sobre el Pliego:** Si bien el PBC es la 'ley de la licitación', este no puede supeditar ni anular las obligaciones de control establecidas en la Ley Nacional. El Artículo 37 de la Ley N° 7021/22 obliga al evaluador a garantizar la solvencia del contratista. Una omisión en el PBC no puede interpretarse como una licencia para contratar a empresas insolventes, lo cual constituiría una negligencia grave del ordenador de gastos.

**Principio de Verdad Material:** El procedimiento administrativo moderno exige que la autoridad busque la realidad de los hechos. Al constatar que se trataba de una oferta única para un servicio crítico (Auditoría Impositiva), esta UOC activó de oficio el mecanismo de verificación para evitar un daño patrimonial sistémico.

**Facultad de Complementación Documental:** La normativa permite solicitar aclaraciones y documentos de soporte que no alteren la oferta económica. Los documentos de capacidad analizados y plasmados en el informe de evaluación otorgan certeza jurídica al acto administrativo, transformando un PBC simplificado en una adjudicación robusta y segura.

*Cualquier cuestionamiento basado en el 'excesivo formalismo' de que dichos requisitos no figuraban taxativamente en el pliego, debe ser rechazado por ser contrario al Principio de Eficiencia y Responsabilidad. Esta Unidad no solo cumplió con la celeridad exigida por la urgencia, sino que blindó la contratación asegurando que la firma posee la capacidad técnica, financiera y experiencia necesaria para hacer frente al proceso de licitación y en virtud a la urgencia requerida, evitar el bloqueo del RUC y la parálisis de los haberes de 2.700 jubilados.*

**Se ratifica,** por tanto, la plena validez y eficacia del informe de evaluación, el cual se ajusta a los estándares de control más elevados del Sistema Nacional de Suministro Público."

## **VI. DE LA INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE JUBILACIONES.**



**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

✓ **CIRCULAR SJP.SG N° 001/2026, Señores Caja Municipal,**

La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones (SJP), en ejercicio de las atribuciones de supervisión y control, conferidas por el artículo 6° inciso j) de la Ley N°7235/2023 "QUE REGLAMENTA EL ROL DEL SUPERVISOR DEL ESTADO A LAS ENTIDADES DE JUBILACIONES Y PENSIONES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL", que facultan al requerimiento de informaciones y documentaciones a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones con la periodicidad y forma que la Superintendencia juzgue necesarias, comunica lo siguiente: Con el propósito de contar con información integral y actualizada que permita realizar la revisión y evaluación inicial del sistema previsional bajo su ámbito de supervisión, las Cajas Jubilatorias y de Pensiones, así como las Cooperativas Mutuales, deberán remitir a esta Superintendencia la información detallada en el Anexo I de la presente Circular, conforme a los formatos y plazos definidos. Cabe señalar que la información solicitada posee carácter institucional y será utilizada exclusivamente para fines de análisis, supervisión y evaluación del perfil de riesgos.

Asimismo, servirá de insumo para el diseño de futuros requerimientos regulatorios, que se establecerán de manera proporcional a la naturaleza, tamaño y complejidad de cada entidad.

Reitero la expresión es imperativo contextualizar que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal ha atravesado un periodo de estrés financiero sin precedentes durante los últimos dos ejercicios fiscales, alcanzando un punto de inflexión crítica en el año 2025. Esta coyuntura se manifestó en una iliquidez severa que derivó en un arrastre de cinco meses de atrasos en el cumplimiento de las obligaciones prestacionales con el sector pasivo. Ante este escenario de vulnerabilidad sistémica, la gestión administrativa se vio compelida a implementar mecanismos de control y transparencia de alta complejidad para viabilizar la recuperación de activos críticos, tales como los desembolsos gestionados ante la Intendencia Municipal de Asunción.

En este orden de ideas, resulta técnicamente irrefutable que el histórico desembolso de Gs. 16.500.000.000 (Diez y seis mil quinientos millones de guaraníes), anunciado por el Intendente de Asunción para la regularización de haberes jubilatorios, no constituye un acto aislado de voluntad política, sino el resultado directo de una condición técnica sine qua non. Dicha transferencia de recursos, bajo la estricta vigilancia y los estándares de supervisión de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones (Ley N° 7235/23), estuvo supeditada a la presentación de informes técnicos de alta fiabilidad. Es aquí donde la ejecución del 'Servicio de Fiscalización Financiera Ejercicio 2024 y Auditoría Impositiva', adjudicado a la firma CONSULTORA LM & ASOCIADOS (RUC 80057831-7), adquiere su verdadera dimensión como herramienta de salvaguarda institucional.

Sin el dictamen profesional y la validación técnica resultante de dicho servicio —logrado únicamente gracias a la celeridad de la Vía de la Excepción—, la Caja habría quedado inhabilitada para certificar su estado financiero y cumplir con los requerimientos de compliance exigidos por el órgano regulador y las entidades deudoras. En consecuencia, la contratación por excepción no solo evitó el bloqueo del RUC, sino que fue el catalizador jurídico que permitió inyectar liquidez al sistema, garantizando el derecho alimentario de miles de jubilados y evitando un colapso social de proporciones nacionales. Negar la validez de este proceso implicaría desconocer que el mismo fue el único mecanismo idóneo para transformar una crisis de insolvencia en una gestión de recuperación





**MISIÓN:** "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad".

*patrimonial exitosa, ajustada a los más altos estándares de auditoría y control gubernamental."*

## **VII. CONCLUSIÓN FINAL Y CIERRE JUSTIFICATIVO.**

**POR TANTO**, tras el análisis exhaustivo de los antecedentes fácticos y los fundamentos de derecho expuestos en el presente libelo, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) ratifica la plena validez, legalidad y necesidad imperativa del procedimiento de Contratación por Vía de la Excepción, con base en las siguientes determinaciones finales:

### **1. DE LA SUPREMACÍA DEL INTERÉS PÚBLICO Y EL DERECHO ALIMENTARIO.**

*Esta decisión administrativa no ha sido una opción discrecional, sino un Acto de Estado de Necesidad. Anteponer un rigorismo formalista o una dilación procesal por discrepancias de criterio técnico con el órgano rector, hubiera significado la vulneración directa del Artículo 57 de la Constitución Nacional. La protección integral de los 2.700 jubilados y pensionados, cuyo sustento vital dependía de la regularización financiera institucional, constituye el fin último y superior que convalida la utilización de la vía excepcional.*

### **2. DE LA EFICACIA PROBADA.**

*La ejecución inmediata de este servicio, bajo la responsabilidad técnica de la firma CONSULTORA LM & ASOCIADOS, ha demostrado ser el catalizador jurídico-financiero que permitió la recuperación de activos críticos por un valor de Gs. 16.500.000.000. Este resultado fáctico, obtenido bajo la supervisión de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, ratifica que la inversión realizada cumple con creces el principio de Valor por Dinero establecido en la Ley N° 7021/22, transformando una crisis de insolvencia en una gestión de éxito patrimonial.*

### **3. DE LA INTEGRIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.**

*Esta UOC reafirma que se han agotado todas las instancias ordinarias y que la simplificación del PBC fue una medida estratégica de celeridad, debidamente subsanada mediante una evaluación de idoneidad técnica y financiera post-apertura de rigor. Cualquier interpretación que pretenda anular este proceso ignorando la Verdad Material de los hechos —el bloqueo inminente del RUC y la parálisis del sistema previsional— incurriría en una arbitrariedad manifiesta que esta Institución no puede convalidar.*

**EN VIRTUD DE TODO LO EXPUESTO**, se concluye que la presente vía de excepción ha sido la única herramienta idónea y proporcional para evitar una catástrofe social y financiera de dimensiones nacionales. Se actúa en defensa del patrimonio de los afiliados, en observancia de la jerarquía normativa de la Ley sobre reglamentaciones inferiores, y en cumplimiento del deber ético y legal de asegurar la paz social de la República.

**Es mi dictamen, bajo exclusiva responsabilidad técnica y en salvaguarda de los intereses de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.**

Orlando D. Martínez M.  
Responsable Int. UOC